



# CDSI

Comissió de Drets Socials i Inclusió  
**Parlament de Catalunya**

Sessió 30. Dimecres, 25 de març de 2026. XV legislatura

## DOSSIER

### ORDRE DEL DIA

---

1. Proposta de resolució sobre la prestació d'ajuda de les dones embarassades vulnerables. Tram. 250-00545/15 Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 232, 18).
  2. Proposta de resolució sobre la protecció de les persones sense llar. Tram. 250-00549/15 Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 232, 26).
  3. Proposta de resolució sobre l'obertura d'una residència geriàtrica a Badia del Vallès. Tram. 250-00624/15 Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 261, 9).
  4. Proposta de resolució sobre el projecte d'alberg juvenil a la Ciutat del Repòs de Tarragona. Tram. 250-00692/15 Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 279, 57).
  5. Proposta de resolució sobre el foment del voluntariat. Tram. 250-00719/15 Grup Parlamentari de Junts. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 299, 53; esmenes: BOPC 335, 29).
  6. Proposta de resolució sobre la millora i l'ampliació dels centres d'atenció a la discapacitat infantils. Tram. 250-00720/15 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 299, 54).
  7. Proposta de resolució sobre el cost de la immigració massiva. Tram. 250-00783/15 Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 11).
  8. Proposta de resolució sobre l'accessibilitat digital als entorns i serveis en línia de la Generalitat. Tram. 250-00794/15 Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 27; esmenes: BOPC 368, 15).
-

Punt 1 | Debat i votació

## **Proposta de resolució sobre la prestació d'ajuda de les dones embarassades vulnerables**

**250-00545/15**

PRESENTACIÓ: GP VOX

**Reg. 38191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.2025**

### **A la Mesa del Parlament**

Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, María Elisa García Fuster, diputada del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la prestación de ayuda a las mujeres vulnerables embarazadas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials i Inclusió, con el siguiente texto:

### **Exposición de motivos**

El empeño de las administraciones públicas catalanas para fomentar el aborto es diario e hipersubvencionado. Mientras, existe un claro déficit de atención pública a las mujeres durante el tiempo de gestación, provocado por una focalización en la ideología progresista.

Específicamente, aunque la provisión de servicios y prestaciones públicas a las familias y a la maternidad sea en general muy pobre, las ayudas, prestaciones y asistencia destinadas a mujeres embarazadas –prenacimiento– son inexistentes. Las pocas ayudas vigentes se concentran en el post-nacimiento y Cataluña se encuentra en posiciones mediocres en los rankings generales de prestaciones a las familias a nivel nacional y europeo.

Como resultado, los datos en Cataluña son un fiel reflejo de esta desidia en la política familiar y maternal llevada a cabo por el Govern.

No en vano, a nadie sorprende que Cataluña fuera la región española con la tasa más alta de abortos por cada 1.000 mujeres, con un 20,5% del total de abortos que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional.

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2023 se practicaron en nuestra región un total de 21.175 de abortos, 385 más que el año anterior, representando esta cifra un incremento del 18,5% respecto a hace diez años. Los datos desglosados por edades, también interesantes para entender las causas que llevan a las mujeres a recurrir al aborto, reflejan que un 23,6% de abortos en Cataluña los practicaron mujeres de entre 20 y 24 años, seguidas por la franja de 25 a 29 (22,1%) y por la de 30 a 34 (19,9%). Se realizaron 2.117 abortos a chicas de entre 15 y 19 años (9,9%), y 54 a menores de 15 años.

Y es que analizar los datos es suficiente para comprobar que los motivos habitualmente utilizados por los defensores del aborto para justificarlo, no son las causas que están provocando gran parte de estos casos. Según los datos aportados por el Ministerio, apenas un 2,5% de los casos en Cataluña se justificaron en un «grave riesgo para la vida o salud de la embarazada», y

solo un 2,2% en el «riesgo de graves anomalías en el feto». De hecho, el 95% señalan como motivo un simple «petición de la mujer».

La reincidencia en los abortos es otro de los problemas que nos preocupan en la actualidad. Si bien es cierto que para el 69,6% de las mujeres, el aborto realizado en 2023 era el primero que realizaban, no fue así para el 19,6% de las mujeres que abortaron, para las que ya era el segundo o para más del 10% restante, que ya habían llevado a cabo más de uno.

El aborto puede darse por distintos motivos, que suelen estar relacionados con factores sociales, económicos, culturales, morales, sexuales o que afecten al feto. Es decir, las causas estructurales del aborto engloban factores multidimensionales de muy diferente naturaleza, que pueden ir desde la estabilidad familiar y conyugal hasta motivos puramente socioeconómicos.

Además, existe una gran diferencia de criterio entre las asociaciones promotoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y las organizaciones pro vida sin ánimo de lucro.

Mientras que las asociaciones proabortistas como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) no achacan el alto índice de aborto a ninguna razón en concreto y aseguran que casi la mitad de las mujeres que interrumpe la gestación, lo haría en cualquier circunstancia, las asociaciones provida apuntan especialmente a problemas sociales y económicos tales como la juventud, la falta de pareja estable, el poder adquisitivo y la estabilidad familiar.

En cualquier caso, aquellas mujeres que consideran el aborto como única salida ante una situación socio-económica precaria, sea cual sea el porcentaje, es importante destacar que llegan a la última ratio del aborto tras sentirse abandonadas por su entorno y por las administraciones públicas, pese a ser una opción no deseada y dolorosa.

Atendiendo a la experiencia y conocimientos de asociaciones provida como Fundació Provida o Maternity, en las mujeres adolescentes nos encontramos la no aceptación familiar como principal problema, así como la imposibilidad de compatibilizar la formación académica con los cuidados que requiere un bebé. La falta de pareja estable que secunde su decisión en caso de querer continuar con el embarazo y que comparta el trabajo que suponen dichos cuidados, es otra de las causas principales que abocan a estas jóvenes al aborto.

En este sentido, las consecuencias de estos niveles de aborto pueden dividirse en consecuencias internas o de agencia, que afectan a la persona que se somete a la acción abortiva, y externa o estructurales, que afectan a la sociedad en su conjunto. En el primer caso, hablamos de implicaciones relacionadas con la salud mental, y física de la mujer que decide abortar. En el segundo, nos referimos a cuestiones relacionadas con el reto demográfico y baja natalidad.

En cualquier caso, nos encontramos con un problema con causa multifactorial que requiere una solución multidimensional.

Es decir, durante el itinerario vital de la mujer gestante existen una variedad de necesidades materiales y no materiales que no pueden ser satisfechas por personas y familias en situación socioeconómica precaria. Por ejemplo, un número sustancial de mujeres embarazadas denuncian la imposibilidad de

adquirir ropa adaptada para su embarazo y la incapacidad de afrontar gastos de suplementos nutricionales y vitamínicos durante el embarazo.

Incluso determinadas prestaciones sociales a las que deberían tener acceso están restringidas en la práctica. Tal es el caso de la bonificación de la tarjeta de transporte T-Usual que gestiona la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Entidades pro-vida denuncian cómo hay mujeres en situación de vulnerabilidad que, pese a cumplir con los requisitos para recibir la bonificación del transporte –al contar con una ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento y no recibir ninguna ayuda por parte del Estado–, se les pone todo tipo de pretextos y trabas burocráticas que les impide disfrutar de la bonificación.

La Generalidad de Cataluña debe diseñar medidas multidimensionales de apoyo a la mujer embarazada que incidan en todas las esferas de su vida, ayudando a todas aquellas mujeres que se ven abocadas a abortar por problemas sociales o económicos sin ser una opción deseada sino obligada.

Asimismo, el Departamento de Salud debería incorporar mejoras sustanciales en el actual protocolo de aborto en Cataluña para así garantizar una mayor libertad de elección de las mujeres. A modo de ejemplo, en la fase del circuito asistencial y evaluación previa establecida en el protocolo, las ayudas y prestaciones a mujeres embarazadas las entrega la matrona mediante un sobre cerrado. Sería mucho más conveniente y humanizante si se asegurara la presencia de personal de Servicios Sociales que pudiera atender consultas presencialmente dudas sobre el acceso a prestaciones sociales y ayudas a las mujeres embarazadas.

Por otro lado, la plena libertad de información y elección quedaría amparada en mayor medida si se ofreciera en el protocolo la posibilidad de escuchar el latido del feto -audible desde la sexta semana del embarazo- y la realización de una ecografía 4D para ver el cuerpo del bebé.

En conclusión, con el doble objetivo de reducir el número de abortos y aumentar la natalidad, y asegurar unas condiciones estructurales y de conocimiento para asegurar que la libre elección de abortar sea una decisión informada y meditada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

### **Propuesta de resolución**

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a:

Primero. Favorecer y aumentar las ayudas específicas para mujeres embarazadas adolescentes que quieren continuar estudiando o trabajando, con políticas que permitan la conciliación familiar y la compatibilización de la actividad académica y laboral con el cuidado de un hijo.

Segundo. Crear ayudas económicas específicas a todas aquellas mujeres embarazadas que hayan decidido continuar con el embarazo con escasos recursos que les supongan una limitación para poder mantener económicamente a sus descendientes.

Tercero. Incluir en el protocolo de abortos de Cataluña del Departamento de Salud la posibilidad de:

(I) Escuchar el latido del bebé, si la mujer es atendida a partir de la sexta semana de embarazo.

(II) Realizar una ecografía 4D para ver el cuerpo del bebé.

(III) Incluir en el circuito asistencial y de evaluación previa la asistencia presencial de personal del Departamento de Derechos Sociales para ofrecer información sobre las ayudas y prestaciones sociales disponibles durante el embarazo y la maternidad.

(IV) Explicar las consecuencias socio-psicológicas que produce un aborto.

Cuarto. Elaborar un plan específico de guardería pública para los hijos de aquellas mujeres que carecen de recursos económicos o familiares para el cuidado de su hijo mientras se encuentren trabajando o estudiando, siempre teniendo en cuenta la prioridad nacional tanto en esta como en cualquier otra ayuda al embarazo y la maternidad.

Quinto. Establecer un teléfono fijo de atención a mujeres que estén embarazadas y necesiten apoyo, ayuda o acompañamiento.

Sexto. Diseñar un Plan Integral Multidimensional e Interdepartamental de Apoyo a la Mujer Embarazada. Reorientar todas las políticas públicas dedicadas al fomento del aborto, a la desincentivación del mismo.

Séptimo. Reconocer el trabajo de organizaciones civiles provida y apoyar su labor mediante políticas que favorezcan su objetivo de ayuda a la mujer vulnerable embarazada así como mediante ayudas económicas que les permitan desarrollar su labor.

Octavo. Establecer incentivos fiscales a empresas para la contratación de mujeres embarazadas o madres con hijos menores a su cargo.

Noveno. Garantizar la efectiva bonificación de la T-USUAL a todas aquellas personas, especialmente a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, que reúnen las condiciones al recibir una ayuda de los servicios sociales de un ayuntamiento integrado del ámbito ATM del Área de Barcelona inferior al SMI y no recibir ninguna ayuda por parte del Estado, tal y como se establece en la propia tarificación social de la ATM.

Palacio del Parlament, 9 de mayo de 2025

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

---

Punt 2 | Debat i votació

## **Proposta de resolució sobre la protecció de les persones sense llar**

**250-00549/15**

PRESENTACIÓ: GP VOX

**Reg. 38276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.2025**

### **A la Mesa del Parlament**

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, María Elisa García Fuster, diputada del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución a la protección de las personas sin hogar, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials i Inclusió, con el siguiente texto:

### **Exposición de motivos**

En Cataluña, dado que ni el Govern ni los municipios se han preocupado en poner el foco en ello, no hay datos actualizados que permitan saber cuántas personas duermen en la calle, por lo que es difícil afirmar con exactitud el alcance real de esta problemática.

Por un lado, sabemos que 2.009 personas duermen en la calle en 12 municipios (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sabadell y Reus). En total, estos 12 municipios acogen el 44% de la población catalana.

Por otro lado, el Marco de Acción para el Abordaje del Sinhogarismo en Cataluña 2022-2025 aprobado en los Acuerdos de Govern 59/2022, de 29 de marzo, publicado en el Diario Oficial de Cataluña, de fecha 31 de marzo de 2022 recoge datos de 786 municipios y dice que 5.777 personas viven en la calle directamente o pernoctan en albergues pero tienen que pasar el resto de día en la calle, 5.423 personas no tienen vivienda, es decir, que viven en alojamientos temporales, 25.108 personas viven en viviendas inseguras, con problemas para pagar el alquiler, con una orden de desahucio o que sufren otras situaciones y 22.622 personas viven en viviendas inadecuadas como asentamientos y barracas, sin suministros básicos o masificadas. En total, según datos recogidos en el Marco de Acción, 58.930 personas sufren cualquier situación de sinhogarismo y exclusión residencial en Cataluña. En este contexto, la cifra sería mucho más elevada y hablaríamos de 915.000 personas viviendo en vivienda insegura y 1,3 millones de personas viviendo en vivienda inadecuada.

Sólo en la ciudad de Barcelona, siguiendo los datos de la Fundación Arrels, hay actualmente más de 4.800 personas sin hogar, de las cuales 1.384 duermen diariamente en la calle.

Estas cifras provienen en gran medida de una encuesta realizada a municipios de Cataluña el año 2016 en la cual se tuvieron en cuenta a las personas conocidas por servicios sociales, así como del Registro Unificado de Datos

de los Entes Locales (2014-2019) y del Gestor de Áreas Básicas de Servicios Sociales. Pero es que estas cifras están en constante crecimiento, según el Ayuntamiento de Barcelona, las personas sin hogar se han disparado un 56% en 8 años en Barcelona y en l'Hospitalet de Llobregat y Badalona, la segunda y cuarta ciudad de Cataluña, se han contabilizado el doble de personas durmiendo en la calle desde hace dos años según el recuento de las entidades sociales. La inacción de la Administración tiene consecuencias dramáticas para estas personas. El abandono, sumado a las circunstancias personales que a cada uno les llevan hasta este, provocan que hasta seis personas sin hogar mueran cada mes en Barcelona.

Conforme pasan los años, y como consecuencia del mal gobierno de las entidades locales, regionales y nacionales, la clase media se encamina hacia la desaparición, lo cual aboca a familias catalanas a incurrir en riesgo de exclusión social, con sus miembros en situación de desempleo y sin oportunidades laborales para desarrollar una vida digna.

En relación con esto, el de la vivienda es uno de los problemas que más aqueja a nuestras familias. El encarecimiento de los precios de arrendamiento y compraventa ha supuesto el desplazamiento de numerosos vecinos, que han tenido que marchar lejos de los lugares donde crecieron y vivieron, donde cuentan con redes de seguridad familiar. Además, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la subida de los tipos de interés impide a muchas familias seguir pagando sus cuotas de alquiler o hipoteca y dispara los casos de desahucio de personas en situación de exclusión social.

Así las cosas, es más necesario que nunca un esfuerzo por parte de las distintas Administraciones Públicas para paliar la situación de emergencia social en la que se encuentra nuestra región, centrando los esfuerzos no en la atención de las necesidades materiales de las personas sin hogar, sino promoviendo enfoques y medidas encaminadas a la reintegración social y laboral de estas personas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

### **Propuesta de resolución**

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a:

Primero. Fomentar inversiones públicas en los barrios degradados para garantizar los equipamientos, infraestructuras de transporte y servicios de salud o cultura para evitar que sus ciudadanos residan en zonas abocadas a la exclusión social.

Segundo. Crear una estrategia que aborde la problemática de las personas sin hogar teniendo como objetivo último su reintegración en el mercado laboral y en la vida social de la comunidad, atendiendo a criterios de prioridad nacional.

Tercero. Impulsar medidas fiscales que incentiven a las empresas y asociaciones a acoger y reintegrar social y laboralmente a las personas sin hogar ofreciéndoles trabajos dignos y adecuados a sus condiciones, atendiendo a criterios de prioridad nacional.

Cuarto. Invertir en municipios con densidad poblacional baja o que actualmente se hallen abandonados con el fin de reestructurar sus viviendas y crear las infraestructuras necesarias en materia de transporte, salud y educación para conseguir el desarrollo necesario en estos pueblos y crear condiciones de vida digna.

Quinto. Realizar en colaboración con los Ayuntamientos de toda la región y antes de que acabe 2025, un informe censal de las personas sin hogar en nuestra región con el objetivo de ser conocedores del alcance real de esta problemática.

Sexto. Establecer la prioridad nacional en cualquier tipo de ayuda social.

Palacio del Parlament, 12 de mayo de 2025

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef; portavoz adjunto; María Elisa García Fuster, diputada GP VOX

---

Punt 3 | Debat i votació

### **Proposta de resolució sobre l'obertura d'una residència geriàtrica a Badia del Vallès**

250-00624/15

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 43734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2025

#### **A la Mesa del Parlament**

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, María Elisa García Fuster, diputada del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la apertura de una residencia geriátrica en Badia del Vallès, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials i Inclusió, con el siguiente texto:

#### **Exposición de motivos**

Badia del Vallès es un municipio de la comarca del Vallès Occidental que cuenta con una población total de 13.415 habitantes. De estos, 2.836 personas tienen más de 65 años, representando un 21,14% del total. Esta cifra supera la media de la comarca, donde el porcentaje de población mayor es del 16,79%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se disponga de cinco plazas residenciales por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Aplicando este criterio, Badia del Vallès debería contar con al menos 142 plazas residenciales. Sin embargo, actualmente el municipio no dispone de una residencia geriátrica, lo que obliga a sus mayores a buscar plazas en otros municipios, con las dificultades de acceso y desarraigo que ello implica.

A nivel comarcal, el Vallès Occidental enfrenta un grave déficit de plazas residenciales. Con una población mayor de 65 años de 157.474 personas, debería contar con 7.874 plazas asistenciales. No obstante, sólo existen 5.689 plazas distribuidas en 91 residencias, lo que supone una media de 62 plazas por centro y un déficit superior a las 2.000 plazas.

Este problema se agrava con la evolución demográfica, ya que la baja natalidad y el envejecimiento acelerado de la población auguran un incremento sustancial de la demanda de servicios asistenciales en los próximos años.

El acceso a una residencia geriátrica es un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico. La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Dependencia establecen el compromiso de las administraciones públicas con la atención a las personas más vulnerables. Sin embargo, en Badia del Vallès, la falta de plazas residenciales se suma a una situación socioeconómica preocupante: la pensión media en Badia del Vallès es de 979,11 €, un 6% inferior a la media comarcal de 1.038,34 € y la tasa de paro en marzo de 2021 alcanzaba el 19,88% de la población activa (1.350 personas), con un impacto especialmente negativo en las mujeres.

Construir una residencia pública en Badia del Vallès no debe considerarse un gasto, sino una inversión social y económica. Este proyecto generaría empleo directo e indirecto, estimándose una media de 0,28 puestos de trabajo por usuario.

El municipio de Badia del Vallès presenta características idóneas para albergar esta infraestructura. Su geografía plana y la escasez de barreras arquitectónicas facilitan la movilidad de las personas mayores. Además, la concentración de servicios públicos permitiría centralizar la atención en un solo emplazamiento, integrando la residencia con un centro de día, pisos tutelados, un servicio de respiro familiar, un comedor social y espacios para actividades lúdicas y culturales dirigidas a la tercera edad.

Para optimizar los recursos públicos, se pueden aprovechar emplazamientos públicos en desuso, como el Colegio Machado, con una parcela de 11.076 m<sup>2</sup> y una superficie construida de 3.871 m<sup>2</sup>; el Colegio Empordá, con una parcela de 10.161 m<sup>2</sup> y una superficie construida de 3.325 m<sup>2</sup>; el Colegio La Muñeira con una parcela de 10.296 m<sup>2</sup> y una superficie construida de 3.500 m<sup>2</sup>; o una parcela sin edificar en la calle Zaragoza (3.500 m<sup>2</sup>).

La construcción de una residencia geriátrica en Badia del Vallès es una necesidad urgente y justificada, que no sólo aliviará la escasez de plazas residenciales en la comarca, sino que también mejorará la calidad de vida de los mayores y sus familias. Además, este proyecto representa una oportunidad para la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido socioeconómico local. La colaboración entre administraciones y la optimización de los recursos públicos harán posible la materialización de este servicio esencial, asegurando que los ciudadanos de Badia del Vallès puedan envejecer con dignidad y en su entorno cercano.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

### **Propuesta de resolución**

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a:

1. Comenzar, en el lapso más breve posible, la construcción de una residencia geriátrica en Badia del Vallès que cubra las necesidades de sus habitantes, suponiendo asimismo un refuerzo asistencial para toda la comarca, comprometiéndose a su finalización antes del final del año 2027.
2. Evaluar y seleccionar la mejor ubicación para la residencia, priorizando la rehabilitación de edificios en desuso para optimizar la inversión pública.
3. Garantizar que la residencia incluya un centro de día, pisos tutelados, un servicio de respiro familiar, un comedor social y espacios para actividades dirigidas a la tercera edad.
4. Incorporar el proyecto en el presupuesto de la Generalitat y establecer un calendario de ejecución.
5. Iniciar un plan de contratación de personal, priorizando la generación de empleo en Badia del Vallès para contribuir a la mejora socioeconómica del municipio.

6. Instar al Ayuntamiento de Badia del Vallès a colaborar activamente con la Generalitat para la cesión de terrenos o edificaciones en desuso con el fin de facilitar la materialización del proyecto.

Palacio del Parlament, 17 de junio de 2025

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

---

Punt 4 | Debat i votació

## **Proposta de resolució sobre el projecte d'alberg juvenil a la Ciutat del Repòs de Tarragona**

250-00692/15

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 46948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.07.2025

### **A la Mesa del Parlament**

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, María Elisa García Fuster, diputada del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa al proyectado albergue juvenil en Ciutat de Repòs (Tarragona), para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials i Inclusió, con el siguiente texto:

### **Exposición de motivos**

La denominada Ciutat de Repòs de Tarragona está siendo objeto de un ambicioso proyecto de rehabilitación y reconversión como albergue juvenil público. El Govern de la Generalitat ha destinado 15,2 millones de euros al proyecto, financiados con fondos europeos Next Generation EU, con un calendario de finalización fijado para junio de 2026.

Según la versión oficial, el complejo formará parte de la red pública de albergues juveniles Xanascats, gestionada por la Dirección General de Juventud, y su objetivo declarado es el alojamiento de jóvenes en actividades de ocio educativo y vacacional. No obstante, múltiples indicios normativos, declaraciones contradictorias y un contexto social y político de opacidad han generado una creciente preocupación ciudadana sobre la verdadera finalidad de esta infraestructura.

La Plataforma pro-Llevant, que aglutina a buena parte del tejido vecinal del entorno, ha manifestado reiteradamente su alarma ante la posibilidad, cada vez más plausible, de que el recinto sea utilizado -total o parcialmente- como un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Esta preocupación se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 14.2.e del Decreto 16/2022, el cual permite a las administraciones públicas, en caso de necesidad, destinar discrecionalmente instalaciones juveniles a la acogida de personas y familias en situación de vulnerabilidad social, sin establecer garantías claras de transparencia, participación vecinal ni limitaciones temporales o cuantitativas.

Resulta preocupante que se haya modificado recientemente el marco normativo sin debate parlamentario previo ni evaluación de impacto territorial o social, con un precepto legal que actúa como «caballo de Troya legal», permitiendo usos que desnaturalizan la finalidad propia de los equipamientos juveniles y generan inseguridad jurídica. La elasticidad del concepto de «vulnerabilidad» y su compatibilidad con «el funcionamiento ordinario de

las instalaciones» ocultan una posible deriva hacia centros asistenciales estructurales de facto.

A ello se añade la falta de respuestas claras por parte del Departamento de Derechos Sociales sobre el uso final de las instalaciones, los criterios operativos para su eventual reconversión, los mecanismos de control del gasto público asociado y la falta de participación de la ciudadanía afectada en el proceso.

Cabe recordar que los albergues juveniles, financiados con recursos públicos y con un objeto específico recogido en la legislación sectorial, no pueden transformarse en centros de acogida improvisados sin vulnerar el principio de legalidad y el derecho a la información y participación pública.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

### **Propuesta de resolución**

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a:

Primero. Garantizar que el albergue de la Ciutat de Repòs no será reconvertido, total ni parcialmente, en centro de acogida de menores extranjeros no acompañados ni de otros colectivos distintos de los jóvenes destinatarios del sistema público de albergues.

Segundo. Hacer público el expediente completo del proyecto de reforma de la Ciutat de Repòs, incluyendo la documentación técnica, administrativa y financiera, así como los criterios de adjudicación, gestión y seguimiento del mismo.

Tercero. Modificar el Decreto 16/2022, suprimiendo o restringiendo sustancialmente el artículo 14.2.e, de forma que se garantice que las instalaciones juveniles se destinarán exclusivamente a los fines para los que originalmente fueron concebidas.

Cuarto. Instar al Gobierno de la Nación y a las instituciones comunitarias responsables del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) a fiscalizar con rigor el uso de los fondos europeos destinados al proyecto de la Ciutat de Repòs, garantizando su adecuación estricta al objetivo de fomentar la movilidad juvenil y el ocio educativo.

Palacio del Parlament, 7 de julio de 2025

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

---

Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

### **Proposta de resolució sobre el foment del voluntariat**

250-00719/15

PRESENTACIÓ: GP JUNTS

Reg. 50947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.09.2025

#### **A la Mesa del Parlament**

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts, Ennату Domingo i Soler, portaveu a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Grup Parlamentari de Junts, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el foment del voluntariat a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió, amb el text següent:

#### **Exposició de motius**

El voluntariat és un instrument essencial per garantir drets, enfortir la democràcia i fomentar la participació dels ciutadans en la solució dels reptes socials locals, nacionals i internacionals. S'estima que hi ha centenars de milers de voluntaris (la majoria dones i persones grans) a Catalunya involucrats en el sector social, però no hi ha prou dades que quantifiquin la seva magnitud, el seu valor econòmic o l'impacte social. No obstant això el voluntariat té un paper complementari tant per l'Administració Pública com per als professionals del tercer sector social de Catalunya identificant els buits de les Polítiques Públiques Socials, i donant respostes allà on l'administració no hi arriba.

En un context de grans divisions econòmiques i socials, és imperatiu enfortir el voluntariat com a eina de cohesió social que teixeix xarxes i consciència a les persones a implicar-se en la millora de les condicions de vida de les veïnes i veïns. Alhora que cerca garantir una societat conscienciada amb la dignitat, la inclusió i justícia social, i el respecte pels drets humans.

Per aquests motius, presenta la següent:

#### **Proposta de resolució**

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Desplegar la llei 25/2015 del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme abans de finalitzar el 2025.
2. Desenvolupar un Pla d'Impuls i Acció del voluntariat a Catalunya, abans de finalitzar el 2025, per garantir el reconeixement, formació i promoció del voluntariat entre la població més jove garantint l'equilibri territorial i la inclusió. El Pla tindrà indicadors clars sobre el nombre de voluntaris i entitats, dedicació de les persones voluntàries, el seu impacte social i econòmic i la seva evolució temporal.
3. Definir una estratègia, abans de finalitzar el 2025, per promoure el voluntariat corporatiu perquè les empreses catalanes estiguin implicades en la millora de la justícia social a casa i en l'àmbit internacional.

4. Crear una plataforma digital des dels Departaments de Drets Socials i Acció Exterior per centralitzar les associacions de voluntaris, els projectes, la demanda i perfil de voluntariat, i marc d'actuació, subvencions i formació.
5. Desenvolupar l'àrea de coordinació d'entitats de voluntaris dins el Departament de Drets Socials.
6. Establir, abans de finalitzar el 2025, una assegurança general per a totes les persones voluntàries, independentment de l'àmbit en què actuïn, que garanteixi una cobertura bàsica comuna.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2025

Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Ennatu Domingo i Soler, portaveu a la CDSI, GP Junts

#### ESMENES PRESENTADES

Reg. 60592 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDSI, 24.10.2025

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60592)

#### **Esmena 1**

GP Socialistes i Units per Avançar (1)

De *modificació* del punt 1

1. *Continuar desplegant* la llei 25/2015 del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

#### **Esmena 2**

GP Socialistes i Units per Avançar (2)

De *modificació* del punt 3

3. Definir una estratègia, abans de finalitzar *la present legislatura*, per promoure *la responsabilitat social corporativa (o alternativament «l'anomenat voluntariat corporatiu»)* perquè les empreses catalanes estiguin implicades en la millora de la justícia social a casa i en l'àmbit internacional, *tenint en compte les accions que moltes empreses ja estan realitzant i que tenen integrades a les seves Estratègies d'RS corporatives i de sostenibilitat.*

---

## Punt 6 | Debat i votació

### **Proposta de resolució sobre la millora i l'ampliació dels centres d'atenció a la discapacitat infantils**

250-00720/15

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.09.2025

#### **A la Mesa del Parlament**

Ester Capella i Farré, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Najat Driouech Ben Moussa, portaveu a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Campuzano i Canadés, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la millora i ampliació dels Centres d'Atenció a la Discapacitat (CAD) infantils, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió, amb el text següent:

#### **Exposició de motius**

L'atenció precoç i adequada als infants de 0 a 6 anys amb discapacitat o amb risc de presentar-ne és clau per garantir el seu desenvolupament i afavorir la seva inclusió social.

A Catalunya, el Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) Infantil és l'encarregat de realitzar les valoracions oficials de la discapacitat en infants de 0 a 6 anys. Aquestes valoracions són determinants per a l'accés a recursos específics, suports econòmics, intervencions terapèutiques i adaptacions educatives.

Segons la informació proporcionada pel Departament de Drets Socials i Inclusió, entre gener de 2020 i maig de 2025 s'han valorat un total de 3.054 infants al Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) Infantil, que opera principalment a la província de Barcelona, excloent-ne la Catalunya Central i el Vallès Occidental.

Actualment, només hi ha un centre específic per a infants a la ciutat de Barcelona, mentre que a la resta del territori (Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l'Ebre), les valoracions s'efectuen des dels CAD generals, amb recursos que sovint no estan pensats específicament per a la infància. Aquesta situació genera una desigualtat territorial en l'atenció als infants i a les seves famílies, que es tradueix en temps d'espera i en dificultats per accedir a serveis adaptats.

Tot i que el Departament ha manifestat que està treballant en l'estudi i planificació per potenciar els CAD infantils, és imprescindible prioritzar aquest procés i garantir una xarxa territorial equilibrada, amb centres específics arreu del país.

Per aquests motius, presenta la següent:

### **Proposta de resolució**

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Desplegar una xarxa de Centres d'Atenció a la Discapacitat (CAD) específics per a infants a totes les demarcacions catalanes, garantint una cobertura territorial equitativa i accessible arreu del territori.
2. Prioritzar l'ampliació dels recursos humans i materials dels CAD infantils, amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i oferir una atenció especialitzada i de qualitat tant per als infants com per a les famílies.
3. Presentar a la Comissió de Drets Socials i Inclusió, en el termini màxim de sis mesos, un pla detallat per a l'ampliació i descentralització dels CAD infantils, amb calendari d'execució i previsió pressupostària.
4. Garantir la coordinació entre els CAD infantils i els serveis sanitaris, socials i educatius del territori per assegurar una intervenció integral i precoç.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2025

Ester Capella i Farré, portaveu; Najat Driouech Ben Moussa, portaveu a la CDSI; Carles Campuzano i Canadés, diputat, GP ERC

---

## Punt 7 | Debat i votació

### **Proposta de resolució sobre el cost de la immigració massiva**

250-00783/15

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 57659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.2025

#### **A la Mesa del Parlament**

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, María Elisa García Fuster, diputada del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el coste de la inmigración masiva, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials i Inclusió, con el siguiente texto:

#### **Exposición de motivos**

España lleva décadas enfrentándose a una auténtica emergencia demográfica con una bajísima tasa de natalidad de 1,12 hijos por mujer. Esta emergencia se afronta de dos maneras distintas:

La fórmula del bipartidismo y del separatismo que consiste en importar de forma masiva y descontrolada culturas incompatibles con la nuestra y con baja cualificación es un fracaso. El resultado: precarización del mercado laboral, pérdida de identidad, aumento de la inseguridad, degradación de nuestros barrios, incremento de la criminalidad y aumento del gasto social sin priorizar a los españoles más necesitados.

La fórmula de VOX, que consiste en fomentar la natalidad para revertir el invierno demográfico, garantizar empleos dignos, acceder a una vivienda digna, bajar impuestos y reindustrializar España. Así como en apoyar a las familias y recuperar el principio básico de que la solidaridad intergeneracional sólo puede sostenerse con españoles trabajando y formando familias, no a base de importar mano de obra barata.

El discurso según el cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es falso tal y como demuestra entre otros el Informe sobre el Coste de la Inmigración publicado recientemente por la Fundación Disenso. Los datos demuestran que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava.

Incluso si aceptáramos la premisa de que la inmigración puede contribuir a la sostenibilidad de las pensiones, lo cierto es que los inmigrantes ya residentes en España presentan tasas de desempleo muy superiores a las de la población nativa. El caso de los inmigrantes de origen africano es ilustrativo: su tasa de paro a nivel nacional alcanza el 25%. A su vez, en Cataluña observamos cómo los hombres marroquíes tienen una tasa de paro superior al 27% y las mujeres marroquíes superior al 54%. Mientras esta situación no se corrija y no se logre el pleno empleo entre la población inmigrante ya insta-

lada en nuestro país, no existe justificación para seguir incrementando los flujos de entrada bajo el pretexto de «pagar las pensiones».

España debe adoptar una política migratoria clara y firme: no debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas; y debe avanzarse en la deportación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y la protección de nuestro Estado del Bienestar.

Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles. La mentira repetida durante años por los gobiernos del PP y del PSOE, así como por sus diferentes muletas separatistas, de que necesitamos millones de inmigrantes para sostener las pensiones es falsa y los datos muestran exactamente lo contrario: la inmigración poco cualificada no paga las pensiones, sino que genera déficit.

Resulta contradictorio que, los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones, oculten que las tasas de desempleo de los extranjeros superan holgadamente a la de los españoles.

Con unas cifras desorbitadas de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos millones de parados españoles y cientos de miles de parados extranjeros.

Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra Nación sin trabajar, representando el 58% del total, alrededor de 7 millones de extranjeros. En nuestra región, las cifras de paro entre la población inmigrante extracomunitaria son 5 puntos porcentuales superiores a las de los nacionales. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a cualquier ayuda/prestación pública, vemos como no sólo estamos endeudando a los españoles de a pie, sino que además en no pocas ocasiones, se quedan fuera del reparto social.

Este patrón no es exclusivo de España. Países con mayor tradición de análisis sobre el impacto fiscal de la inmigración han llegado a conclusiones similares.

En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publicó un informe exhaustivo en el que se comparaban las aportaciones y gastos asociados a diferentes tipos de inmigración. El resultado fue contundente: los inmigrantes procedentes de países no occidentales generan cada año un déficit fiscal de más de 4.400 millones de euros. Este saldo negativo persistía incluso en la segunda generación. Por el contrario, los inmigrantes occidentales o altamente cualificados presentaban balances neutros o ligeramente positivos. Este diagnóstico llevó a Dinamarca a reformular sus políticas migratorias, estableciendo criterios más exigentes para la entrada y acceso a determinadas prestaciones sociales.

En Países Bajos, el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis llegó a conclusiones similares. Según sus cálculos, los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponían un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo de su ciclo de vida. El estudio destacaba que, incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida. Además, se observaba que los hijos de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales intergeneracionalmente.

Estos ejemplos muestran que la cuestión no es estar a favor o en contra de la inmigración en abstracto, sino reconocer que no toda inmigración es igual. Una inmigración cualificada, con salarios elevados y alta participación en el mercado laboral, puede aportar un saldo positivo o neutro. Pero la inmigración masiva y poco cualificada, que es la que ha recibido España en las últimas décadas, genera sistemáticamente un déficit para las cuentas públicas y, por tanto, no puede ser presentada como la solución a nuestros problemas demográficos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

### **Propuesta de resolución**

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a instar al Gobierno de la Nación a:

Primero. Proceder a la remigración de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación e impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:

Segundo. Establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización.

Tercero. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

Palacio del Parlament, 6 de octubre de 2025

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

---

Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

## **Proposta de resolució sobre l'accessibilitat digital als entorns i serveis en línia de la Generalitat**

250-00794/15

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 59216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.2025

### **A la Mesa del Parlament**

Juan Fernández Benítez, portaveu, Montserrat Berenguer Messeguer, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l'accessibilitat digital als entorns i serveis en línia de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió, amb el text següent:

#### **Exposició de motius**

L'accessibilitat digital és avui una condició indispensable per garantir els drets d'inclusió, autonomia i igualtat d'oportunitats de la ciutadania. En una societat cada vegada més digitalitzada, on bona part dels tràmits, gestions i serveis públics es fan a través de plataformes digitals, és imprescindible que tothom hi pugui accedir en igualtat de condicions, també les persones amb discapacitat. Segons dades oficials, al voltant del 10% de la població catalana algun grau de discapacitat reconeguda. Aquest col·lectiu es veu sovint exclòs de l'accés a la informació o als serveis digitals per manca de mesures d'accessibilitat adequades.

Amb la voluntat de combatre aquesta exclusió, el 28 de juny de 2025 va entrar plenament en vigor la Directiva (UE) 2019/882 del Parlament Europeu i del Consell sobre els requisits d'accessibilitat dels productes i serveis, coneguda com a European Accessibility Act (EAA). Tant aquesta normativa com la Directiva (UE) 2016/2102 (Directiva d'Accessibilitat Web) han estat corresponentment transposades a Espanya mitjançant la Llei 11/2023, de 8 de maig, d'accessibilitat de determinats productes i serveis per a la garantia de la igualtat d'accés i no discriminació de les persones amb discapacitat, i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, que regula l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquest marc, junt amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, obliga les administracions públiques i els proveïdors de serveis digitals a garantir que les seves plataformes compleixen els requisits d'accessibilitat establerts.

Malgrat el marc normatiu clar, encara són moltes les pàgines web i aplicacions que no compleixen amb els criteris mínims d'accessibilitat: text amb baix contrast, imatges sense descripció, formularis sense etiquetes, enllaços sense context informatiu, botons sense identificació, canvis d'idioma no indicats, i altres barreres que limiten l'accés de milers de persones.

Cal subratllar que els beneficis de l'accessibilitat digital van més enllà de les persones amb discapacitat. Les mesures d'accessibilitat digital repercuteixen

en benefici de tothom perquè ofereixen entorns digitals clars, amb una jerarquia visual adequada, subtítols per a vídeos que permeten seguir-los en entorns sorollosos, assistents de veu per a la recerca d'informació o tipografies llegibles.

Tant per motius d'interès general com per raons legals cal garantir que les webs i aplicacions de la Generalitat compleixen amb els estàndards d'accessibilitat establerts, i que també es faciliti la transformació digital de les petites i mitjanes empreses, que sovint no disposen dels recursos tècnics o econòmics per adaptar-se als nous requeriments. És important que aquests petits negocis tinguin la certesa que aquesta conversió accessible no és només una despesa, sinó pot ser també una inversió que repercuteixi en un mercat potencial més ampli obert a persones amb discapacitat, gent gran i altres usuaris amb necessitats especials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

### **Proposta de resolució**

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Revisar de manera immediata totes les pàgines web i aplicacions digitals oficials de la Generalitat de Catalunya per assegurar que compleixen amb els criteris d'accessibilitat establerts per la normativa vigent, especialment els recollits a la Directiva (UE) 2019/882 i la seva transposició estatal.
2. Impulsar les actualitzacions tècniques i funcionals necessàries per garantir l'accessibilitat plena dels entorns digitals públics, i establir un sistema periòdic de control i millora contínua.
3. Revisar les pàgines web i aplicacions digitals de les fundacions, entitats, empreses i organismes que presten serveis públics en règim de concert o col·laboració amb la Generalitat i donar-los les orientacions i ajudes necessàries perquè compleixin la normativa d'accessibilitat digital.
4. Desplegar un programa específic d'ajuts i assessorament tècnic a les petites i mitjanes empreses catalanes, per facilitar la conversió dels seus espais digitals (pàgines web, aplicacions, comerç electrònic, etc.) a formats accessibles, en compliment del marc legal i amb criteris d'usabilitat universal.
5. Dur a terme campanyes de sensibilització i formació sobre l'accessibilitat digital, adreçades tant al sector públic com al privat, per fomentar una cultura digital plenament inclusiva.

Palau del Parlament, 8 d'octubre de 2025

Juan Fernández Benítez, portaveu; Montserrat Berenguer Messeguer, M. Belén Pajares Ribas, diputades, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69029; 69054 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDSI, 03.12.2025

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS (REG. 69029)

**Esmena 1**

GP de Junts (1)

De *modificació* del punt 1

1. *Promoure una auditoria externa de totes les pàgines web i aplicacions digitals oficials de la Generalitat de Catalunya per assegurar que compleixen amb els criteris d'accessibilitat establerts per la normativa vigent, especialment els recollits a la Directiva (UE) 2019/882 i la seva transposició estatal.*

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 69054)

**Esmena 1**

GP Socialistes i Units per Avançar (1)

De *modificació* del punt 1

1. *Continuar la tasca de revisió de totes les pàgines web i aplicacions digitals oficials de la Generalitat de Catalunya per assegurar que compleixen amb els criteris d'accessibilitat establerts per la normativa vigent, especialment els recollits a la Directiva (UE) 2019/882 i la seva transposició estatal.*

**Esmena 2**

GP Socialistes i Units per Avançar (2)

De *modificació* del punt 2

2. *Seguir impulsant les actualitzacions tècniques i funcionals necessàries per garantir l'accessibilitat plena dels entorns digitals públics, i establir un sistema periòdic de control i millora contínua*

**Esmena 3**

GP Socialistes i Units per Avançar (3)

De *modificació* del punt 3

3. *Expressar la necessitat que les fundacions, entitats, empreses i organismes que presten serveis públics en règim de concert o col·laboració amb la Generalitat revisin les pàgines web i aplicacions digital.*

**Esmena 4**

GP Socialistes i Units per Avançar (4)

De *modificació* del punt 4

4. *Traslladar al Ministeri per a la Transformació Digital i la Funció Pública la conveniència de prorrogar el Kit Digital, per donar resposta a les necessitats de les petites i mitjanes empreses en termes d'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat, tenint en compte també la facilitació de la conversió dels seus espais digitals (pàgines web, aplicacions, comerç electrònic, etc.) a formats accessibles, en compliment del marc legal i amb criteris d'usabilitat universal.*

**Esmena 5**

GP Socialistes i Units per Avançar (5)

De *modificació* del punt 5

*5. Dur a terme campanyes de sensibilització i formació sobre l'accessibilitat digital, adreçades al sector privat, per fomentar una cultura digital plenament inclusiva.*

---